



---

## **CERTIFICACIÓN DE ACUERDO RELATIVO A INFORME**

---

Acto que se certifica: Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 24 de marzo de 2022, por el que se ha aprobado el siguiente:

**INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, APROBADO POR EL REAL DECRETO 141/2021, DE 9 DE MARZO.**

### **I. ANTECEDENTES**

1.- Mediante escrito de la Secretaría de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia se ha solicitado a este Consejo General del Poder Judicial la evacuación del correspondiente informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 561.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

2.- La Comisión Permanente del Consejo, en su reunión del día 9 de marzo de 2021, designó como Ponente de este informe al Vocal Vicente Guilarte Gutiérrez.

### **II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FUNCIÓN CONSULTIVA DEL CGPJ**

3.- La función consultiva del Consejo General del Poder Judicial a que se refiere el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en la redacción dada a dicho precepto por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio) tiene por objeto los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten total o parcialmente, entre otras materias expresadas en el citado precepto legal, a «[n]ormas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales», y «cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna» (apartados 6 y 9 del art. 561.1 LOPJ).



4.- Atendiendo a este dictado, en aras a una correcta interpretación del alcance y sentido de la potestad consultiva que allí se prevé a favor de este Consejo, y considerado el contenido del Proyecto remitido, el informe que se emite se limitará al examen y alcance de las normas sustantivas o procesales que en él se incluyen específicamente, evitando cualquier consideración sobre cuestiones ajenas al Poder Judicial o al ejercicio de la función jurisdiccional que éste tiene encomendada.

5.- Sin perjuicio de lo anterior, y con arreglo al principio de colaboración entre los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha venido indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones relativas, en particular, a cuestiones de técnica legislativa o de orden terminológico, con el fin de contribuir a mejorar la corrección de los textos normativos y, por consiguiente, a su efectiva aplicabilidad en los procesos judiciales, por cuanto son los órganos jurisdiccionales quienes, en última instancia, habrán de aplicar posteriormente las normas sometidas a informe de este Consejo, una vez aprobadas por el órgano competente.

6.- El Proyecto normativo que se informa tiene por objeto la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita (Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, en adelante, RAJG), dictado en desarrollo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (en adelante, LAJG), con el fin principal de dar respuesta a la recomendación del Defensor del Pueblo al Ministerio de Justicia de 11 de octubre de 2021, que señalaba: *1. Que se garantice a las víctimas de violencia de género que son asistidas y representadas por letrados de los turnos de oficio especializados en esta área de los correspondientes colegios profesionales, un asesoramiento de calidad, sin que sea posible la participación en dicho servicio de abogados que hayan sido condenados por violencia de género y 2. Que se recoja la información necesaria y se adopten las medidas pertinentes para que se establezca normativamente y a nivel estatal dicho sistema de limitación al ejercicio profesional en el turno de oficio especializado en violencia de género, de manera que se regule expresamente la necesidad de que los profesionales del turno de oficio relacionados con una intervención específica en este ámbito carezcan de antecedentes penales en violencia de género.*

7.- Así, el texto proyectado se centra, mediante la introducción en el RAJG de un nuevo artículo 32bis, en requerir un “plus de exigencia” -como se denomina en el preámbulo- a los profesionales de la abogacía inscritos en



el turno de oficio especializado en violencia de género, así como, en línea de coherencia con el artículo 2.g) LAJG, en la prestación del servicio de asistencia letrada, defensa y representación gratuita a las víctimas de delitos de terrorismo y de trata de seres humanos, o a víctimas de cualquier delito cuando estas sean personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Junto con ello, se actualiza también el apartado 3 del artículo 1 RAJG para proceder a la inclusión en el mismo del artículo 32 y del nuevo artículo 32 bis, incorporando como disposiciones de aplicación estatal tanto los requisitos generales mínimos exigibles a los Abogados y Procuradores de los tribunales (art. 32) como los requisitos específicos ahora introducidos (art. 32 bis), sin perjuicio de los requisitos complementarios que hayan establecido o puedan establecer las Comunidades Autónomas.

8.- En consecuencia, la competencia de este Consejo para informar sobre la disposición normativa proyectada deriva de las funciones que le atribuye el ordinal sexto del artículo 561.1 LOPJ, al tratarse de una norma que afecta a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los tribunales del ejercicio de derechos fundamentales, por cuanto el derecho de justicia gratuita se halla instrumentalmente conectado, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 95/2003, de 22 de mayo, 183/2001, de 17 de septiembre y 117/1998, de 2 de junio), con el derecho fundamental a obtener una tutela judicial efectiva (artículo 119 en relación con el artículo 24.1 CE), siendo oportuno recordar a tal efecto que la Constitución Española en su artículo 24 reconoce el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, como vertiente de acceso a la jurisdicción, en su artículo 119 establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar; ello sin perjuicio de extender su contenido al examen de la adecuación de la regulación reglamentaria al título competencial, y, desde luego, a aquellos aspectos de técnica normativa que contribuyan a dotar de mayor corrección al texto y, por ende, a facilitar la recta interpretación y aplicación de las normas que lo integran.

### **III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO**

9.- El texto proyectado consta de un artículo único que lleva por rúbrica *«Modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado por Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo»*. Consta, además, de dos disposiciones finales, la primera de las cuales aborda lo atinente al título



competencial, siendo el artículo 149.1.5ª y 18ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la Administración de Justicia y sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, el marco competencial en el que se sustenta el texto que se informa; la segunda de las disposiciones finales establece la entrada en vigor del Real Decreto proyectado, que será al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

10.- El artículo único del Proyecto comprende dos apartados: el número uno modifica el apartado tercero del artículo 1 del RAJG relativo al *objeto y ámbito de aplicación* del Reglamento y el número dos introduce un nuevo artículo 32bis en el RAJG intitulado *"Requisitos específicos para determinadas prestaciones de asistencia jurídica gratuita"*.

#### **IV. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL MARCO NORMATIVO Y EL TÍTULO COMPETENCIAL:**

11.- La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, delimitan aquellos preceptos de carácter básico y de general aplicación en todo el territorio nacional, correspondiendo a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Administración de Justicia regular aquellos aspectos de la prestación de asistencia jurídica gratuita que le son propios, de conformidad con la disposición adicional primera de dicha Ley.

12.- En este sentido, el artículo 1, apartado 2 del RAGJ delimita su ámbito de aplicación a *"todo tipo de procesos ante juzgados y tribunales con jurisdicción en todo el territorio nacional o en el territorio de una comunidad autónoma que no haya recibido los traspasos en materia de provisión de medios al servicio de la Administración de Justicia y a los procedimientos administrativos cuya tramitación y resolución corresponda a órganos de la Administración General del Estado, siempre que se encuentren legalmente comprendidos en el derecho de asistencia jurídica gratuita"*. La exclusión de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia del ámbito de aplicación de la norma reglamentaria no es, sin embargo, general, ya que de conformidad con el apartado 3 de este mismo artículo, se exceptúan de lo anterior los artículos 17; 21; apartados 1, 3 y 4 del artículo 33; 39; 40 y 41, que son de



aplicación general en todo el territorio nacional, y ello de conformidad con la disposición adicional primera de la LAJG.

13.-En su redacción actual, por tanto, no se encuentra incluido en el apartado 3 del artículo 1 del Reglamento el artículo 32, destinado a establecer los *"Requisitos generales mínimos exigibles a los Abogados y Procuradores de los Tribunales"*, y ello a pesar de que el mismo se dicta en desarrollo del artículo 25 LAJG, que establece que *"El Ministerio de Justicia, de manera coordinada con las Comunidades Autónomas competentes, previo informe de los Consejos Generales de la Abogacía y de los Procuradores de los Tribunales de España, establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios obligatorios de asistencia jurídica gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa. **Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para todos los Colegios Profesionales**"*, y a pesar de que la propia disposición adicional primera de la Ley señala que *"los artículos 25 y 26 del capítulo III y el capítulo VI, se dictan en virtud de la competencia del Estado reconocida en el artículo 149.1.18.<sup>a</sup> de la Constitución Española, conforme al cual corresponde a éste dictar las «Bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas»"*.

14.-Cabe señalar que el mandato normativo establecido en el artículo 25 LAJG fue inicialmente desarrollado mediante la Orden del Ministerio de Justicia, de 3 de junio de 1997, por la que se establecen los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, y cuyo apartado tercero establece que los mismos *"serán de obligado cumplimiento para **todos** los Colegios de Abogados y de Procuradores, sin perjuicio de los requisitos complementarios que puedan establecer las Comunidades Autónomas que hayan asumido el ejercicio efectivo de competencias en materia de provisión de medios materiales para el funcionamiento de la Administración de Justicia"*, y que no fueron incorporados al Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado por Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, ni en su redacción original ni en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, habiéndose informado por este Consejo la conveniencia de la integración de dichos requisitos en la norma reglamentaria (informe aprobado por el Pleno el 19 de diciembre de 2019 al Proyecto de Real Decreto de modificación), lo que finalmente se hizo a través del artículo 32 del nuevo Reglamento, aprobado por Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, y que ahora se modifica, cuyo apartado



tercero establece también que *“los requisitos establecidos serán de obligado cumplimiento para **todos** los Colegios de Abogados y de Procuradores”*.

15.-En consecuencia, el apartado uno del artículo único del Proyecto de Real Decreto que se informa, por el que se determina la inclusión del artículo 32 -y por extensión del nuevo artículo 32bis que recoge requisitos específicos también de obligado cumplimiento para **todos** los Colegios Profesionales de la Abogacía y la Procura- en el apartado 3 del artículo 1 del RAJG resulta conforme al marco normativo expuesto y al título competencial referido en la disposición final primera del texto proyectado, esto es, artículos 149.1. 5ª y 18ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la Administración de Justicia y sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, dotándose con ello de coherencia a la norma reglamentaria, y aportando seguridad jurídica.

16.-También resulta conforme con los artículos 149.1.5ª y 18ª CE el apartado segundo del artículo único del texto proyectado, por el que se introduce un nuevo artículo 32bis en el RAJG, pues el presente Proyecto de Real Decreto constituye el instrumento normativo adecuado, en virtud de su rango normativo y del mandato contenido en el artículo 25 LAJG, anteriormente citado, que ha de servir para la actualización de los requisitos exigidos a los abogados y procuradores para prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita, concretamente en el turno de oficio especializado a las víctimas de violencia de género -y, en línea de coherencia con el artículo 2.g) LAJG, en la prestación del servicio de asistencia letrada, defensa y representación gratuita a las víctimas de delitos de terrorismo y de trata de seres humanos, o a víctimas de cualquier delito cuando estas sean personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección-, dotando a través del mismo de la correspondiente virtualidad efectiva a la recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo al Ministerio de Justicia el 11 de octubre de 2021, toda vez que este se configura como el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución Española, donde se contempla el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), debiendo traer a colación que el artículo 30 de su Ley Orgánica reguladora (Ley Orgánica 3/1981, de 3 de abril) señala:

*1. El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades y funcionarios de las Administraciones*



*Públicas advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades y los funcionarios vendrán obligados a responder por escrito en término no superior al de un mes.*

*2. Si formuladas sus recomendaciones dentro de un plazo razonable no se produce una medida adecuada en tal sentido por la autoridad administrativa afectada o éste no informa al Defensor del Pueblo de las razones que estime para no adoptarlas, el Defensor del Pueblo podrá poner en conocimiento del Ministro del Departamento afectado, o sobre la máxima autoridad de la Administración afectada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud entre los casos en que considerando el Defensor del Pueblo que era posible una solución positiva, ésta no se ha conseguido.*

## **V. CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE EL NUEVO ARTÍCULO 32 BIS:**

17.- Como se ha señalado, además de la inclusión del artículo 32 en el apartado 3 del artículo 1, el objetivo principal del texto proyectado es la regulación de los “*Requisitos específicos para determinadas prestaciones del servicio de asistencia jurídica gratuita*”, que se incorporan como un nuevo artículo 32 bis, con el siguiente tenor:

*1. Los profesionales de la abogacía y la procura que presten servicio de asistencia jurídica gratuita en el turno de oficio especializado de víctimas de violencia de género no podrán contar con antecedentes penales por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexual o la intimidad en el ámbito de la violencia sobre la mujer, salvo que los mismos se encuentren cancelados.*

*Asimismo, para prestar asistencia letrada, defensa y representación gratuita a víctimas de delitos de terrorismo y de trata de seres humanos, o a víctimas de cualquier delito cuando estas sean personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, los y las profesionales de la abogacía y la procura no podrán tener antecedentes penales por delitos cometidos, respectivamente, sobre cada una de las clases de víctimas anteriormente enumeradas, salvo que los antecedentes se encuentren cancelados.*

*2. Los requisitos establecidos anteriormente serán de obligado cumplimiento para todos los Colegios Profesionales de la Abogacía y la Procura, sin perjuicio de los requisitos complementarios que hayan*



*establecido o puedan establecer las Comunidades Autónomas que han asumido competencias en materia de Administración de Justicia.”*

18.- Como señala el preámbulo del texto sometido a informe: *«El derecho a la justicia gratuita proclamado en el artículo 116 de la Constitución implica garantizar a la ciudadanía la prestación de un servicio público de justicia gratuita especializado y de calidad que responda en primer lugar a la existencia de una relación de respeto mutuo y confianza entre el o la profesional que ejerce la defensa legal y el beneficiario de justicia gratuita, requisito que con carácter general se exige para todo profesional de la Abogacía como prevé expresamente el artículo 47.2 del Estatuto General de la Abogacía: "La relación del profesional de la Abogacía con el cliente debe fundarse en la recíproca confianza"»* -debe significarse que el texto remitido hace referencia, por manifiesto error, al artículo 116 CE, debiendo sustituirse por el artículo 119 CE-. En el mismo sentido, señalaba el Consejo de Estado en su informe de 25 de febrero de 2021 al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita que *«la realidad actual y la experiencia de la que ya se dispone en la prestación de la asistencia jurídica gratuita exige desplegar un esfuerzo sostenido para conseguir que la asistencia prestada alcance, mantenga y responda a un elevado estándar de conocimientos y de dedicación profesional. Solo con ese nivel podrá conseguirse que la asistencia jurídica gratuita cubra las necesidades a las que debe hacer frente»*.

19.-El establecimiento de un estándar suficiente de conocimientos, experiencia y formación profesional necesarios para un adecuado cumplimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y, por ende, del derecho a la tutela judicial efectiva, dada su relación instrumental, se ha llevado a cabo, como se ha apuntado en las consideraciones generales, mediante la regulación en el Reglamento de los *"Requisitos mínimos exigibles a los Abogados y Procuradores de los Tribunales para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita"* (artículo 32), que ya venían determinados en la Orden del Ministerio de Justicia de 3 de junio de 1997, y entre los que se incluyen la acreditación de más de tres años de ejercicio efectivo de la profesión, y el haber superado los cursos o pruebas de acceso a los servicios, establecidos por las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados.

20.-Al margen de que, como se sugirió en el informe ya citado de este Consejo de 19 de diciembre de 2019, procedería revisar dichos requisitos en atención a la reforma operada por la Ley 34/2006, de 30 de octubre,





sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, y el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba su Reglamento, donde se establece con carácter general la superación de estudios de postgrado, así como un examen de Estado para el acceso a las citadas profesiones, debe ponerse de manifiesto que entre los requisitos establecidos por el Real Decreto 141/2021 no se incluyen aquellos que podrían estar vinculados al desempeño del turno específico recogido en el artículo 24 LAJG *“para la prestación de los servicios de asesoramiento previo y de asistencia letrada para las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos y de menores de edad y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato”*, turno establecido mediante la disposición final tercera, apartado 16, de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC, para asegurar a estas víctimas el acceso inmediato al asesoramiento jurídico, como se prevé concretamente en la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo.

21.-Por su parte, algunas normas autonómicas reguladoras de la asistencia jurídica gratuita sí han previsto de forma expresa, dentro de la habilitación para establecer requisitos complementarios a los abogados y procuradores (disposición adicional primera LAJG, en relación con el artículo 32.3 RAJG), el requisito específico de una formación especializada para el acceso y mantenimiento en los turnos especializados (artículo 32.2 del Decreto 153/2018, de 30 de octubre, de Asistencia Jurídica Gratuita del país Vasco; artículo 31.2 del Decreto foral 104/2021, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita Aplicable en la Comunidad Foral de Navarra; artículo 30 Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia; artículo 21.2 del Decreto 175/2021, de 29 de octubre, del Consell, de aprobación del reglamento de asistencia jurídica gratuita, de la Comunidad Valenciana). En otros casos, los propios Colegios de Abogados, en el establecimiento de sus normas reguladoras del turno de oficio, incluyen el requisito específico de formación especializada para poder formar parte de los turnos de violencia de género, menores o trata de seres humanos, entre otros.

22.-Sin embargo, más allá de la exigencia de una formación especializada y de la existencia de protocolos de buenas prácticas (por ejemplo, y entre



otros, Protocolo para la actuación en la defensa de personas con discapacidad intelectual; Protocolo de Trata de Seres Humanos; Guía práctica para el asesoramiento legal a víctimas de violencia de género), ni la normativa estatal ni la autonómica contemplan ningún requisito concreto vinculado a la ausencia de antecedentes penales relacionados con los delitos de los que han sido objeto las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos, o los menores de edad y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que han sufrido abuso o maltrato y que requieren la asistencia jurídica gratuita.

23.-Por tanto, la opción ahora proyectada por el prelegislador responde a un vacío normativo, puesto de manifiesto por la recomendación del Defensor del Pueblo, y que se circunscribe a exigir a los abogados y procuradores la ausencia de antecedentes penales de similar naturaleza respecto de aquellos de los que ha resultado víctima la persona representada, llevándose a cabo, en consecuencia, una exclusión fundamentada de dichos profesionales, los cuales no podrán ejercer la defensa legal en el turno de oficio en relación con víctimas de la misma condición que aquellas por las que hayan sido condenados, lo que a su vez se cohonestaría adecuadamente, como también se señala en el preámbulo de la norma proyectada, con el tratamiento diferenciado que la LAJG y el RAJG dispensan a estas víctimas en razón de la gravedad del delito o de su especial vulnerabilidad (artículo 2 g) LAJG).

24.-A su vez, la reforma proyectada debe vincularse, como igualmente se señala en el preámbulo del texto que se informa, con el probable quebranto que tendría en la relación de confianza exigible entre abogado y cliente (artículos 47.2 y 51 del Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la abogacía española) el que dicho profesional contara con *«antecedentes penales por hechos de similar naturaleza respecto de aquellos de los que ha resultado víctima la beneficiaria de justicia gratuita»*.

25.-En este sentido, cierto es que el artículo 21 bis LAJG (introducido por la disposición final segunda de la Ley 3/2018, de 11 de octubre) permite instar la solicitud de nuevos profesionales por motivo debidamente justificado, donde podría entenderse incluido el hecho de que el abogado o procurador designado tuviera antecedentes penales relativos al delito del que ha sido objeto la víctima representada y/o asistida, pero la falta de una lista de motivos tasados que incluya dicha causa específica para justificar el cambio y el hecho de que la decisión corresponde a Colegios



Profesionales y Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, con independencia de su ulterior control jurisdiccional, hacen que dicha opción resulte insuficiente para responder adecuadamente a la Recomendación del Defensor del Pueblo y a las exigencias de una asistencia jurídica gratuita especializada y de calidad, instrumento del derecho a la tutela judicial efectiva y basada en la confianza entre profesional y cliente.

26.-De otro lado, los nuevos requisitos específicos que se introducen en el nuevo artículo 32bis también se establecen para **todos** los colegios profesionales (apartado 3), y ello de conformidad con el artículo 25 LAJG, por lo que su inclusión en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento resulta conforme al marco normativo y al título competencial habilitante, como se ha apuntado en las consideraciones generales de este informe.

## **VI. CONCLUSIONES**

**PRIMERA.-** El presente Proyecto de Real Decreto constituye el instrumento normativo adecuado, en virtud de su rango normativo y del mandato contenido en el artículo 25 LAJG, que ha de servir para la actualización de los requisitos exigidos a los abogados y procuradores para prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita en el turno de oficio especializado a las víctimas de violencia de género, y en línea de coherencia con el artículo 2g) de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, para prestar dicho servicio a las víctimas de delitos de terrorismo y de trata de seres humanos, o a víctimas de cualquier delito cuando estas sean personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, dotando así de la correspondiente virtualidad efectiva a la Recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo al Ministerio de Justicia el 11 de octubre de 2021, toda vez que este se configura como el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución Española, donde se contempla el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE).

**SEGUNDA.-** Para dar cumplimiento a las exigencias constitucionales de una asistencia jurídica gratuita de calidad, por su conexión instrumental con el derecho a la tutela judicial efectiva, el artículo 32 RAJG, de conformidad con el artículo 25 LAJG, recoge los *"Requisitos generales mínimos exigibles a los Abogados y Procuradores de los Tribunales"*, reproduciendo los requisitos que ya venían establecidos en la Orden del



Ministerio de Justicia de 3 de junio de 1997. Por su parte, algunas normas autonómicas reguladoras del ejercicio del derecho a la asistencia jurídica gratuita han previsto de forma expresa, dentro de la habilitación para establecer requisitos complementarios exigibles a los abogados y procuradores (disposición adicional primera LAJG, en relación con el artículo 32.2 RAJG), el requisito específico de una formación especializada para el acceso y mantenimiento en los turnos especializados.

**TERCERA.**-Sin embargo, ni la normativa estatal ni la autonómica contemplan ningún requisito vinculado a la ausencia de antecedentes penales relacionados con los delitos de los que han sido objeto las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos, o los menores de edad y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que han sufrido abuso o maltrato y que requieren la asistencia jurídica gratuita, por lo que la opción ahora proyectada por el prelegislador responde adecuadamente a este vacío normativo, puesto de manifiesto por la recomendación del Defensor del Pueblo, y se circunscribe a exigir a los abogados y procuradores la ausencia de antecedentes penales de similar naturaleza, respecto de aquellos de los que ha resultado víctima la persona representada, llevándose a cabo, en consecuencia, una exclusión fundamentada de dichos profesionales, los cuales no podrán ejercer la defensa legal en el turno de oficio en relación con víctimas de la misma condición que aquellas por las que hayan sido condenados, lo que a su vez se cohonesta adecuadamente, con el tratamiento diferenciado que la LAJG y el RAJG dispensan a estas víctimas en razón de la gravedad del delito o de su especial vulnerabilidad (artículo 2 g) LAJG).

**CUARTA.**-Tanto los requisitos mínimos generales (artículo 32) como los requisitos específicos que ahora se regulan (nuevo artículo 32 bis) se establecen para todos los colegios profesionales, de conformidad con el artículo 25 LAJG, por lo que su inclusión en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento que se realiza a través del apartado uno del artículo único del texto proyectado resulta conforme al marco normativo y al título competencial (artículos 149.1 5ª y 18ª CE), dotando de coherencia y seguridad jurídica a la norma reglamentaria.

Es cuanto ha de informar el Consejo General del Poder Judicial.

Lo precedente concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste extiendo y firmo la presente en Madrid a 24 de marzo de 2022.



**CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Firmado digitalmente: Jose Luis de Benito y Benítez de Lugo  
Secretario General